
Lucrecia Lozano*

*NICARAGUA 1987:
Entre la guerra y la lucha por
la paz y la autodeterminación***

El recrudecimiento de la agresión contrarrevolucionaria

Aunque el número de efectivos de las fuerzas antisandinistas, según datos manejados por el gobierno nicaragüense, disminuyó sensiblemente a partir de 1985, al grado de considerarse que en 1987 no sobrepasaban los 6 mil 500 hombres —menos de la mitad que los estimados en 1984, año en el que la “contra” llegó a tener 15 y 16 mil combatientes—, la lucha de estos grupos a lo largo de 1987 se caracterizó no sólo por la intensificación y extensión de sus acciones militares sino también porque éstas alcanzaron una cualificación que no se había observado en los años anteriores.

En la reactivación de la guerra jugó un papel cardinal la ayuda de 100 millones de dólares aprobada por el Congreso de Estados Unidos el 25 de junio de 1986, misma que empezó a llegar a estas fuerzas en noviembre de ese año. El financiamiento, destinado en un 70 por ciento a la adquisición de material bélico, permitió a los contrarrevolucionarios proveerse de armamento privativo de ejércitos convencionales¹ —como aviones, helicópteros y misiles tierra-aire— y de sofisticados sistemas de

* Coordinadora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la FCPyS, UNAM.

** Trabajo elaborado a partir de las discusiones organizadas por el seminario interinstitucional “Escenarios políticos en Centroamérica” del Centro de Estudios Centroamericanos de Relaciones Internacionales (CECARI).

¹ Entre el moderno armamento con que cuenta actualmente la contrarrevolución nicaragüense se encuentran fusiles automáticos AK, FAL y G-3, lanzacohetes RPG-7; ametralladoras PRK; morteros de 60 mm.; granadas y minas antipersonales; cañones de 57 mm.; explosivos C-4; radios tipo Ikom y Walkie y misiles SAM-7 y Red-Eye.

comunicación y detección, factores que les brindaron una capacidad operacional superior y que condujeron al agravamiento de la guerra en Nicaragua durante 1987.

Tal y como lo admitiera en diciembre de 1987 el ministro de Interior, Tomás Borge, la existencia, en manos de la “contra”, de varias decenas de cohetes tierra-aire Red Eye y Sam-7² obligó al Ejército Popular Sandinista (EPS) a limitar el uso de helicópteros de combate MI-24 y de transporte MI-17 y MI-8 en sus operaciones militares. Incorporados en los últimos años al ejército nicaragüense, estos aparatos se convirtieron en el arma estratégica en las derrotas infringidas a las fuerzas antisandinistas en el periodo 1985-86. Todo parece indicar, sin embargo, que el uso de misiles permitió a los contrarrevolucionarios neutralizar de una manera más o menos eficaz este medio de guerra en las filas del EPS.

Asimismo, el gobierno denunció que durante 1987 se intensificó el espionaje aéreo radioeléctrico que Estados Unidos realiza en las costas del Pacífico y el Atlántico nicaragüenses mediante aviones del tipo RC-135, EC-130, U-21 y U-2³ y cuya información, remitida a los contrarrevolucionarios a través de la estación de la CIA en Centroamérica, ha facilitado a éstos valiosa información sobre la ubicación de radares y la movilización de tropas y medios de guerra del EPS.

La estrategia desplegada por la contrarrevolución en 1987 se distinguió igualmente por los esfuerzos relativamente exitosos de penetrar con profundidad en el territorio nicaragüense. Adolfo Calero, el más prestigioso dirigente antisandinista ante los ojos del Departamento de Estado, señaló a principios del año que la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) había logrado infiltrar desde diciembre de 1986 “unos 10 mil combatientes” y que existía el propósito de aumentar esa cifra en los meses subsiguientes hasta conseguir que 15 mil “contras” estuvieran en “posiciones de combate” en dos terceras partes del país para el mes de mayo. Los planteamientos de la dirigencia contrarrevolucionaria durante 1987 fueron enfáticos en su propósito de “ganarse el corazón de la población civil” a fin de legitimar su lucha al interior de Nicaragua y demostrar ante el Congreso de Estados Unidos la necesidad de continuar apoyando su causa. “El principal elemento para una victoria de los antisandinistas es la participación de la población civil, que nos ha dado una tremenda bienvenida en nuestra infiltración”, apuntó Calero.

² Fuentes antisandinistas declararon que recibieron 300 cohetes tierra-aire SAM-7 como parte de la ayuda de los 100 millones de dólares. *Unomásuno*, México, 16 de abril de 1987. Salvo la aclaración contraria, todas las referencias e informaciones de diarios mexicanos han sido consultadas en las *Cronologías Temáticas* del CECARI.

³ *La Jornada*, México, 6 de abril de 1987.

El optimismo existente en las filas rebeldes tras la recepción de la ayuda estadounidense se tradujo, incluso, en lo que algunos de sus sectores calificaron de preparativos de una “ofensiva final” contra el gobierno. De acuerdo con estos planes, se estimaba poder derrocar al EPS en 1989 luego de desarrollar una intensa actividad militar durante 1987-88 que descartaba —a diferencia de la estrategia impulsada en los años anteriores— la ocupación de posiciones fijas —concepción de lucha que brindaba mayores ventajas al EPS, que tiene un mayor número de efectivos y cuenta con mejor armamento— y proponía impulsar una táctica de guerra de guerrillas.

El combate guerrillero significó un ajuste de cuentas con los planteamientos dominantes en el esquema de la lucha de estas fuerzas, quienes desde el inicio de sus hostilidades en 1981 se propusieron liberar una parte del territorio nicaragüense a fin de instalar allí un gobierno provisional que contara con el reconocimiento de la Casa Blanca.

No cabe duda que la nueva modalidad de lucha fue adoptada luego de constatar sus limitados avances en el terreno de la guerra. En sus momentos de mayor desarrollo, durante todo 1984 y parte de 1985⁴, la “contra” no logró, por ejemplo, asegurar ningún objetivo militar estratégico ni pudo ocupar ciudad o población alguna, por no hablar de sus reiterados fracasos para estructurar un frente interno que, en concordancia con la presión militar impulsada por ellos, favoreciera a un alzamiento popular contra el régimen revolucionario.

Esta situación determinó que un número cada vez mayor de funcionarios civiles y militares estadounidenses se vieran obligados a reconocer, sobre todo a partir de 1984, que los contrarrevolucionarios no constituían una amenaza real para el gobierno nicaragüense; que podían, en efecto, convertirse en un elemento de presión militar y de desestabilización, pero que contaban con nulas posibilidades de triunfar por sí mismos.⁵

A partir de ese momento, la estrategia de la reversión del proceso revolucionario entró en una nueva fase caracterizada por la articulación creciente de la presión militar de los “contras” con la desestabilización de la economía nacional. La confianza y optimismo iniciales en torno a una rápida y segura victoria militar de los antisandinistas sobre el EPS

⁴ Datos de esta agrupación indican que en 1985 estaba estructurada en 14 comandos regionales, cada uno de los cuales contaba con un promedio de 800 combatientes organizados en 2-4 fuerzas de tarea. *Cfr. Documents on the Nicaraguan Resistance: Leaders, military personnel and program*, U.S. Department of State, Bureau of Public Affairs, Washington, D.C., Special Report no. 142, s.f.

⁵ El general Paul Gorman, ex jefe del Comando Sur en la Zona del Canal, en Panamá, admitiría en 1985 que la “contra” no representaba un verdadero peligro militar para los sandinistas.

—funcionarios del gobierno estadounidense afirmaban en junio de 1983 que los contrarrevolucionarios controlarían en diciembre de ese año una tercera parte de la población rural y la mitad del territorio nacional— fueron sustituidos por la apreciación más realista de que el triunfo se lograría en el mediano o largo plazo y que la guerra tendría, por tanto, una mayor duración: una guerra contrarrevolucionaria prolongada, no circunscrita a cuestiones exclusivamente militares que pondría especial énfasis en las operaciones psicológicas y las acciones encubiertas de desestabilización económica, política, ideológica, etcétera. Ya desde mediados de 1983, la CIA, cuyo involucramiento en la crisis nicaragüense se desarrolló desde 1980, llegó a la conclusión de que los ataques contra objetivos económicos y de transporte significarían una forma más rápida y efectiva de infringir daños a los sandinistas que los esfuerzos desplegados hasta esos momentos de otras formas.⁶ Tanto la Agencia como el Pentágono participaron activamente en la definición y promoción de esta nueva etapa de la guerra contra Nicaragua.

Aunque en el terreno económico la estrategia de desestabilización resultó exitosa al provocar el desquiciamiento de la economía mediante la descapitalización, el bloqueo comercial y de fuentes de crédito y la destrucción de la producción y la planta instalada, obligando al gobierno nicaragüense a destinar, en algunos años, casi el 50 por ciento del gasto público a la defensa y la seguridad, a partir de finales de 1985 y a lo largo de 1986 las fuerzas contrarrevolucionarias sufrieron tales golpes y descalabros en su enfrentamiento con el EPS que las llevaron a perder la iniciativa en el combate y a experimentar una merma significativa en el número de sus combatientes.

El Ministerio de Defensa de Nicaragua sostuvo a principios de 1987 que si 1986 había sido el año de profundización de la derrota estratégica de la “contra” y el EPS había logrado desarticular y desalojar a los antisandinistas de los territorios en guerra, 1987 se convertiría en el del aceleramiento total de esa derrota “reduciendo de manera considerable la capacidad operativa y táctica de los mercenarios”.⁷

El EPS ha definido la “derrota estratégica” de estas fuerzas como un proceso que se abre en 1985, en el que, paralelamente a la pérdida de la iniciativa operativa táctico-militar del enemigo, se avanzó en la implementación de la doctrina militar de la revolución, denominada de “resistencia activa”, y en la construcción de un ejército moderno. En forma simultánea se aplicaron planes integrales económicos, políticos y socia-

⁶ *The Chronology. The documented day-by-day account of the secret military assistance to Iran and the contras*, The National Security Archive, N.Y., Warner Books, 1987, p. 40.

⁷ Declaraciones del coronel Hugo Torres, jefe de la Dirección Política del Ejército Popular Sandinista, en *El Día*, México, 13 de febrero de 1987.

les que permitieron incorporar más activamente en los proyectos de transformación a sectores —fundamentalmente campesinos— que habían sido marginados del proceso de cambio y que, por esa misma razón, se habían convertido en una real y potencial fuente de apoyo de la contrarrevolución.

El general Humberto Ortega, ministro de Defensa, declaró que aunque en 1987 se pretendía fortalecer el proceso de desarticulación de las fuerzas antisandinistas, “atomizándolas y aislándolas para acelerar la derrota total, tanto desde el plano estratégico como en el operativo-táctico”, no era posible plantear una victoria total sobre los contrarrevolucionarios “porque el carácter de la guerra no es convencional”.⁸ La estrategia a seguir por parte del EPS sería, por tanto, acelerar la atomización y el aislamiento de la “contra” y profundizar su diseminación táctica “para que se convierta en dispersión estratégica”.⁹

La multimillonaria ayuda votada por el Congreso para los antisandinistas matizó, sin embargo, estos pronósticos. Gracias a los 100 millones de dólares, éstos, pese a la reducción de casi un 50 por ciento en el número de sus efectivos con relación a los hombres en armas con que contaba en 1984, pudieron reactivar sus acciones militares y consiguieron que varios miles de sus combatientes penetraran profundamente en territorio nicaragüense en los meses finales de 1986 y las primeras semanas de 1987. En marzo de este último año, el capitán Ricardo Wheelock, jefe de Inteligencia Militar del EPS, reconoció que desde diciembre habían ingresado por la frontera norte del país unos 4 mil 200 comandos como parte de lo que denominó un “ciclo” que se repite anualmente desde 1982.

La lucha de los “contras” en 1987 se distinguió, además, por la presencia de elementos que imprimieron al combate de estos grupos características particulares con relación a las observadas en años anteriores. Entre ellas vale la pena destacar las siguientes:

Tal y como se indicaba arriba, y como consecuencia de la desarticulación de sus fuerzas por parte del EPS, la contrarrevolución adoptó una nueva modalidad de lucha: la de la guerra de guerrillas, que significó la dispersión de sus otrora grandes fuerzas de tarea¹⁰ en

⁸ Intervención del general Humberto Ortega en la reunión de jefes de las Unidades Militares de la VI Región Militar, realizada el 27 de diciembre de 1986. Ver, *Segovía*, Órgano de la Dirección Política del EPS, Managua, VI Época, No. 16, diciembre de 1986-enero de 1987, p. 35.

⁹ Conceptos vertidos por el ministro del Interior, Tomás Borge, en *El Día*, México, 16 de abril de 1987.

¹⁰ Las fuerzas de tarea, compuesta cada una de ellas por 200-400 hombres, penetraron masivamente desde Honduras a territorio nicaragüense a través de la frontera norte en los años 1983-1984.

unidades de combate menores, especializadas en la realización de emboscadas y, sobre todo, en la ejecución de operaciones de sabotaje contra objetivos económicos y civiles. Enrique Bermúdez, ex-coronel de la Guardia Nacional y jefe militar de la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), la más grande de las organizaciones que combaten al régimen de Managua, señaló que el objetivo de la actividad antisandinista no era controlar territorios, como antaño, sino “golpear al enemigo, movernos rápidamente y desaparecer”.¹¹ Aunque la atomización de las fuerzas “contras” en unidades menores favoreció su desplazamiento y facilitó su rápida movilidad en los momentos de repliegue y retirada, planteó, sin embargo, el complejo problema de asegurar el abastecimiento logístico a fuerzas tan dispersas.

En la medida en que el ejército sandinista afianzó sus posiciones en 1985-86 y se “pego al terreno”, el abastecimiento terrestre de los comandos contrarrevolucionarios que combaten en Nicaragua encaró mayores y más graves dificultades. Garantizar el pertrechamiento de sus fuerzas se convirtió, así, para la dirigencia antisandinista, en una exigencia de primer orden. No cabe duda que en 1987, según lo reconoció el propio EPS, la “contra” logró asegurar con relativa eficacia, contando con la asesoría y participación directa de la CIA, el abastecimiento por aire de sus tropas,¹² hecho que permitió a éstas permanecer más largo tiempo al interior de Nicaragua. De manera sistemática durante todo el año y, en su momento, ante la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento que se instala con la firma de los acuerdos de Paz de Esquipulas II el mes de agosto, el gobierno sandinista denunció que las bases aéreas de Ilopango, en El Salvador, y El Aguacate y Toncontín y la isla Swan en Honduras, se habían convertido en las plataformas a través de las cuales la CIA ha ejecutado y supervisado desde hace varios años los vuelos que aseguran a los contrarrevolucionarios esta vital tarea logística.

Durante 1987, la “contra” impulsó una exitosa estrategia de atacar y sabotear objetivos económicos y productivos —instalacio-

¹¹ *El Sol de México*, 7 de julio de 1987.

¹² Tan sólo entre el 5 de marzo y el 5 de abril el gobierno nicaragüense denunció 34 violaciones de su espacio aéreo desde países vecinos con el propósito de abastecer a la “contra”. En agosto se contabilizaban, a partir de enero, un promedio de 150 vuelos de abastecimiento a estas fuerzas, en los que se emplea alta tecnología que incluye comunicaciones radiales e informes meteorológicos detallados. *La Jornada*, 6 de abril de 1987. Por su parte, el teniente coronel Javier Carrión, jefe del Estado Mayor del EPS, admitió que la sola llegada de un vuelo semanal de aprovisionamiento permitía a los contrarrevolucionarios permanecer en Nicaragua por largos periodos.

nes eléctricas, puentes, transportes, vías de comunicación y centros productivos y agrícolas— con el claro propósito de desquiciar aún más la ya de por sí desgastada economía del país. “Enfrentamos una nueva modalidad de agresión. Ante el fracaso de los mercenarios en el campo militar, el gobierno de Estados Unidos a través de la CIA ha emprendido un plan de guerra económica contra nuestro país”, señalaría el presidente Daniel Ortega.¹³ En el marco de esta estrategia, la voladura de torres de suministro de electricidad¹⁴ y los ataques a cooperativas agrícolas se convirtieron en el recurso predilecto de los sabotajes contrarrevolucionarios. En el primer caso, los planes de la contrarrevolución eran vastos y ambiciosos. Según se supo, existía desde principios del año el propósito de que células urbanas integradas por simpatizantes de la causa “contra” efectuaran regularmente apagones de luz como parte de una “estrategia global” que pretendía ocasionar pérdidas millonarias a la economía y paralizar al país de la misma forma que lo haría una huelga general.¹⁵

Las acciones militares contrarrevolucionarias se intensificaron en 1987 gracias a la recepción de la ayuda estadounidense que permitió a estas fuerzas convertirse en un ejército altamente tecnificado y bien armado.¹⁶ Ello y la modernización del EPS para hacer frente a la agresión, determinaron que la escalada de la guerra en Nicaragua haya adquirido una profundidad y gravedad tales que amenazan incluso con rebasar las propias fronteras y extenderse a países vecinos. Valga de ejemplo la exitosa incursión, reconocida públicamente por el gobierno nicaragüense,¹⁷ que el EPS realizara en marzo en el campamento más grande de la “contra” en Honduras: el Centro de Instrucción Militar, asentado en el fronterizo de-

¹³ *Excélsior*, México, 8 de abril de 1987.

¹⁴ Los sabotajes a postes de tendido eléctrico y a torres de alta tensión se localizaron, sobre todo, en los norteños departamentos de Matagalpa, Jinotega, Nueva Segovia y Madriz. Según señalara el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), estos ataques no sólo han ocasionado pérdidas millonarias a la economía sino que han provocado la suspensión temporal del fluido eléctrico a Costa Rica, Panamá y Honduras. Aunque no se cuenta con datos oficiales, a finales de 1987 se daba la cifra de unas 30 torres de electricidad y otras tantas de teléfono destruidas por los sabotajes “contras”.

¹⁵ Declaraciones del excoronel Enrique Bermúdez, *Ovaciones*, México, 27 de marzo de 1987.

¹⁶ En un comunicado de prensa del Servicio de Información del Ejército de la Resistencia Nicaragüense, Enrique Bermúdez apuntó que la organización que encabeza estaba empeñada en la construcción de “un solo ejército de la resistencia” y que sus fuerzas habían iniciado una ofensiva armada luego de dos años de relativa paralización: “Estamos teniendo más de 300 combates mensuales, o sea, más de 10 diarios de diferentes intensidades. Ultimamente hemos derribado cuatro helicópteros, aceptados y confirmados por los sandinistas y ocho más que han sido averiados”, *El Sol de México*, 7 de julio de 1987.

¹⁷ Incursiones similares se han repetido en otros momentos de la guerra —como la de la Semana Santa de 1986— en respuesta a varias ofensivas contrarrevolucionarias.

partamento de El Paraíso y que tuviera un saldo, según informes oficiales, de 300 antisandinistas muertos.

La actividad contrarrevolucionaria se localizó sobre todo en la zona de la Costa Atlántica y en los norteños departamentos de Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia, Estelí y Madriz, irradiándose a regiones del centro como Chontales, Boaco y Río San Juan, en las cuales no había sido relevante en periodos anteriores. En esta zona se destacaron, además, los esfuerzos contrarrevolucionarios para establecer un frente que reactivara las hostilidades en el sur, las que disminuyeron sensiblemente a partir de 1985, y permitiera asegurar el control del estratégico río San Juan, limítrofe con Costa Rica.

La cualificación de la lucha militar “contra” quedó de manifiesto a mediados del año, cuando en el mes de julio siete comandos especializados de estas fuerzas se lanzaron en paracaídas sobre la selva de Chontales portando misiles tierra-aire Red-Eye, en una acción que el mismo EPS calificó como la primera de este tipo en los seis años en que lleva la guerra.

En la aplicación de estas modalidades más avanzadas y especializadas de combate, el asesoramiento estadounidense ha jugado sin duda un papel fundamental. Fuentes no identificadas de ese país señalaban a la prensa, a principios de 1987, que la CIA y los ex-boinas verdes habían entrenado en los últimos meses a más de mil “contras” en tácticas guerrilleras, de sabotaje, demolición y paracaidismo, en tanto que el dirigente antisandinista Adolfo Calero informaba en marzo que 400 oficiales de estas fuerzas habían concluido su entrenamiento en bases militares de Estados Unidos.

Dos ofensivas significativas fueron lanzadas por la “contra” a lo largo del año: la denominada “ofensiva de primavera”,¹⁸ que se desarrolló en los meses de abril-mayo, y la campaña emprendida en octubre-diciembre en el marco de los Acuerdos de Esquipulas II que tuvo como doble propósito demostrar la ineffectividad del alto al fuego unilateral decretado por el gobierno nicaragüense y presionarlo para que entablara nego-

¹⁸ En el marco del Plan Primavera que lanzaron los contrarrevolucionarios en los meses de abril-mayo de 1987 se llevaron a cabo los más violentos combates de los últimos meses en el norte de Nicaragua, tal y como lo reconociera el ministro de Defensa, gral. Humberto Ortega. Aunque en el ataque de El Bálsamo de Río Blanco el EPS sufrió “las pérdidas más importantes que hayamos registrado en los últimos meses” (T. Borge), al morir 22 efectivos sandinistas, la contraofensiva lanzada por el EPS no sólo logró dispersar al grueso de los “contras” hacia Honduras y frustró sus planes de asentarse en los departamentos de Jinotega y Nueva Segovia, sino que significó la realización de acciones determinantes para el desarrollo de la guerra en ese año, como la inesperada y exitosa incursión sobre el Centro de Instrucción Militar (CIM) de la FDN en Honduras. Ver, “La mejor defensa es el ataque”, en *Inforpress Centroamericana*, Guatemala, 4 de junio de 1987.

ciaciones directas con la dirigencia de la Resistencia Nicaragüense —organismo cúpula de los antisandinistas integrado el mes de mayo—, a fin de concertar el cese del fuego. Según lo confirmara el ministro de Defensa, general Humberto Ortega, la ofensiva o Plan Primavera pretendía que los sandinistas se empantanaran en los combates fronterizos con la “contra” y que en una actitud descontrolada penetraran en territorio hondureño en el momento en que se efectuaban en este país las maniobras “Escudo Sólido”, que involucraron unos 50 mil efectivos norteamericanos y significaron el más grande desplazamiento de soldados estadounidenses al exterior desde la Segunda Guerra Mundial, lo que sería aprovechado por Washington como pretexto para invadir Nicaragua argumentando la agresión a una nación aliada.

Desde su constitución, una política de la contrarrevolución ha sido “inflar” el número de sus efectivos, y aunque durante 1987 dijeron contar con una cantidad que oscilaba entre los 10 y 15 mil combatientes, la información brindada por tres jefes “contras” capturados en marzo permitió constatar que las cifras manejadas por el gobierno de Nicaragua se aproximaban más a la real situación de estos sectores. Los detenidos afirmaron que el 50 por ciento de las fuerzas “contras” —unos 3 mil combatientes— se encontraban en Honduras y que eran aproximadamente 3 mil los hombres que desde noviembre de 1986 se habían infiltrado en territorio nicaragüense. Dieron a conocer, asimismo, que las tropas de refresco antisandinistas se asentaban en las poblaciones hondureñas de Yamales y Banco Grande, departamento de El Paraíso, e indicaron que en Honduras existen tres tipos de campamentos: 1) Las *bases de tránsito*, localizadas en Arenales, Las Mieles, La Lámpara, Español Grande, Banco Grande y San Andrés Bocay; 2) Las *bases de refresco*, ubicadas en Capira, La Fortuna, Cayatú y El Españolito; y 3) Las *bases estratégicas*, en el sector de Yamales, en donde se encuentra el denominado “Comando Estratégico”, integrado por el Estado Mayor de la FDN.

No obstante, la relativamente exitosa reactivación de la lucha militar contrarrevolucionaria se vio empañada por los enfrentamientos y conflictos que, desde sus orígenes, han caracterizado la relación entre los diferentes sectores antisandinistas. Como consecuencia de ello, la vida interna de la UNO (Unión Nicaragüense Opositora), agrupación creada en mayo de 1985 por presiones del Departamento de Estado norteamericano y que aglutinaba a las principales organizaciones contrarrevolucionarias de entonces —FDN; el grupo miskito KISAN; un sector de la Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE), que se separó de Pastora; y las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nicaragüense (FARN)— estuvo marcada por las pugnas entre los grupos antisandinis-

tas más “duros”, identificados con los viejos sectores somocistas y representados por Adolfo Calero —líder político de la FDN, uno de los tres directores de la UNO junto con Arturo Cruz y Alfonso Robelo y estrecho aliado del Departamento de Estado—, y los sectores que, encabezados por Cruz, censuraban las posiciones hegemónicas de Calero y pugnaban por una democratización interna de la UNO y por un mayor peso de los “políticos” en la toma de decisiones para neutralizar la fuerte influencia de los grupos militaristas de la FDN.

Mientras que por razones tácticas Calero renunció en febrero a la cúpula de la UNO, aclarando que seguiría como jefe máximo de la FDN, ese mismo mes Cruz y Robelo demandaban que los antisandinistas debían constituir un ejército único antes de junio con un Estado Mayor colectivo presidido por un comandante de su confianza y bajo la supervisión del directorio civil de la UNO, al cual se incorporaría Pedro Joaquín Chamorro Barrios en marzo a raíz de la crisis de la organización. En respuesta a ello, el jefe militar de la FDN, Enrique Bermúdez, exigió una ampliación en el directorio de la UNO antes de proceder a la unificación de las fuerzas militares “contras” y señaló al semanario estadounidense *Time* que no estaban dispuestos a ceder su poder a funcionarios civiles, a quienes acusó de carecer de autoridad para exigir el control del movimiento.

La pugna Calero-Cruz desembocó en la renuncia definitiva de este último a la dirección de la UNO el primero de marzo, no sin que antes acusara a Estados Unidos de convertir a los contrarrevolucionarios en “una legión de conquistadores en vez de un ejército de liberación” y denunciara que de todas las reformas que había demandado en febrero para democratizar la agrupación, la única que había prosperado era la relativa al control, por parte de los directores de la UNO, de los recursos y finanzas de la organización.

En un documento titulado “Crisis y solución”, Donald Lacayo, miembro de la UNO, reconocía las profundas fracturas de la “contra” y señalaba que ésta se encontraba “dividida, sectarizada y envuelta en luchas intestinas”.¹⁹ La gravedad del enfrentamiento y la existencia de posiciones antagónicas en el seno de los antisandinistas quedaron, sin duda, plasmadas en las declaraciones que Robelo hiciera en enero al sostener que él mismo podría ser llevado al paredón para ser fusilado por las fuerzas más conservadoras de la “contra” en caso que los rebeldes lograran derrocar al gobierno sandinista.²⁰

Por todo lo anterior, el que se disolviera la UNO y se constituyera en

¹⁹ *Novedades*, México, 8 de marzo de 1987.

²⁰ *Excelsior*, México, 28 de enero de 1987.

mayo la Resistencia Nicaragüense (RN) —frente político del Bloque Opositor del Sur (BOS), la UNO y la FDN—, como un esfuerzo más en la ya larga lista de intentos por unificar las fracturadas fuerzas y grupos contrarrevolucionarios, no dejó de ser un exitoso logro para el Departamento de Estado, que veía en la persistencia de la división una grave amenaza para asegurar la continuidad del apoyo del Congreso a la política nicaragüense de la Casa Blanca.

El acuerdo de constitución de la RN se firmó en Miami y en él se fijó el establecimiento de un directorio civil de seis miembros, integrado por Alfredo César, del BOS, organización que se había escindido de la UNO en enero; Adolfo Calero, de la FDN; Azucena Ferrey, ex-vicepresidenta del Partido Social Cristiano; Aristides Sánchez, liberal vinculado al régimen somocista; Alfonso Robelo, exdirigente del Movimiento Democrático Nicaragüense y que afirma sostener posiciones socialdemócratas; y Pedro Joaquín Chamorro Barrios, autodefinido como independiente. El documento constitutivo establecía la integración de una Asamblea de la RN de 54 miembros, en la cual estarían representados los grupos conservadores, liberales, socialcristianos, socialdemócratas, costeños, del BOS, de la empresa privada, del sector laboral y del sector agrario, y acordaba la formación de una sola fuerza militar, denominada Ejército de la Resistencia Nicaragüense (ERN), dirigido por un Consejo de 32 comandantes regionales, pertenecientes a las diferentes facciones “contras”, que respondería ante el directorio civil y cuyo presidente y vicepresidente serían, respectivamente, Enrique Bermúdez y Walter Calderón.

La urgente necesidad de unificar a los contrarrevolucionarios se hizo patente también entre los grupos indígenas alzados en armas en la Costa Atlántica. La RN se propuso incorporar a estas fuerzas y planteó constituir un frente militar del Atlántico como uno de los tres frentes de guerra de ERN.

En el marco de esta tendencia hacia la unidad es que se crea en mayo la Fuerza Armada Unida de la Costa Atlántica (FAUCAN), fruto de la alianza de MISURA —organización fundada en 1982, vinculada estrechamente a la FDN y dirigida por Steadman Fagoth— con KISAN, que se constituye en 1985 y es encabezada por Wiclieff Diego. En junio se incorpora a esta alianza Brooklyn Rivera, dirigente de MISURASATA, agrupación que resurge en 1982 articulada con la Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE) de Edén Pastora y que en 1984 entra temporalmente en conversaciones de paz con el régimen nicaragüense. Como producto de la unidad entre estas tres organizaciones: KISAN, MISURA y MISURASATA, emerge un nuevo organismo denominado YATAMA (Combatientes Unidos por la Atonomía), estrechamente vinculado a la

Resistencia Nicaragüense y cuyo directorio queda integrado por Fagoth, B. Rivera y W. Diego.

La nueva agrupación introdujo una fuerza militar considerable en varias zonas del Atlántico²¹ con el fin de reactivar las acciones armadas y afianzar su presencia en la región. Los avances logrados por el gobierno durante los tres últimos años mediante la política del diálogo impulsada con los alzados en armas, la expedición de una Ley de Amnistía en 1985 y la aprobación de la Ley de Autonomía de la Costa Atlántica sancionada en septiembre de 1987 por la Asamblea Nacional, disminuyeron, sin embargo, el apoyo de los habitantes del Atlántico a los grupos antisandinistas de la región, los cuales se granjearon una considerable simpatía en los años iniciales del proceso revolucionario, debido sobre todo a errores que por voluntarismo o desconocimiento de la realidad histórica de la zona cometieron funcionarios y dirigentes sandinistas en torno a cuestiones como el problema étnico o el traslado de las comunidades indígenas de sus lugares de origen a causa del agravamiento de la guerra.²²

Es un hecho que la coyuntura política que abren los Acuerdos de Paz de Esquipulas II trasladó a un plano secundario los conflictos y enfrentamientos —transitoriamente resueltos, a su vez, con la integración de la RN— entre los grupos contrarrevolucionarios.

El precario equilibrio alcanzado por los antisandinistas en el marco de las negociaciones de paz está sujeto, no obstante, a los vaivenes y azares de una ya vieja historia de crisis, rupturas y contradicciones frágilmente articulada por su decisión de derrocar a la revolución sandinista y alimentadas por concepciones políticas e ideológicas antagónicas. A los avatares de esta trayectoria habría que agregar el creciente desprestigio y falta de legitimidad de estas fuerzas por la recurrente práctica del terrorismo en su actividad militar y por la confirmación de sus nexos y tratos con el narcotráfico internacional a través de la información que hiciera pública el escándalo Irán-contras y que involucra a altos oficiales del ejército de Honduras.

Guerra, desestabilización y crisis económica

A principios de 1987 el gobierno de Nicaragua puso en marcha el Plan Técnico Económico Nacional que formulaba incentivar las exportaciones, garantizar la producción de bienes de consumo e industriales y

²¹ Cfr., Julio Sánchez, "Unificar los indígenas alzados. Un sueño de la administración Reagan", en *Pensamiento Propio*, Managua, Año V, No. 46, noviembre de 1987, pp. 40-44.

²² Ver, Héctor Díaz Polanco y Gilberto López Rivas, *Nicaragua: Autonomía y revolución*, México, Juan Pablos Editor, 1986.

mantener la infraestructura industrial y proponía alcanzar un crecimiento de la economía del 2.1 por ciento, meta que de cumplirse “marcaría el inicio de la recuperación económica del país”, según indicara el ministro de Planificación y Presupuesto, Dionisio Marengo.

De acuerdo con el Plan '87, el gobierno estimularía la producción de las exportaciones a fin de incrementar su captación de divisas, las cuales habían observado tasas de crecimiento negativas desde 1984 —se estimaba obtener alrededor de 360 millones de dólares en exportaciones al término del año, en contraste con los 243 millones recabados en 1986.

La propuesta de reactivar las exportaciones agrícolas y aumentar el volumen de divisas se enfrentó, sin embargo, con diversos obstáculos. La formulación del Plan y su aplicación, que contemplaba al café como producto agrícola estratégico,²³ se daban en el contexto de una crisis agrícola alimentada por el impacto de cinco años de agresión militar —que ha entorpecido y distorsionado el proceso productivo en las zonas rurales en guerra—, por el bloqueo comercial impuesto por el gobierno de Estados Unidos desde mayo de 1985 y por la permanente caída de los precios de las agroexportaciones tradicionales nicaragüenses. En 1987, los efectos acumulados por la falta de capacidad administrativa del gobierno y los errores cometidos en el proceso de aplicación de la reforma agraria, así como la persistencia de una sequía sin precedentes en los años recientes contribuyeron a disminuir aún más las expectativas de la programada recuperación del sector externo.

A consecuencia de la sequía, las pérdidas en la producción de granos básicos fueron considerables según datos dados a conocer en enero de 1988: 2.9 millones de dólares en la producción de arroz, 2.4 millones en la de maíz, 11.7 millones en la de frijol y 10 millones en la de sorgo.

Por otra parte, desde hace varios años, tanto el sector externo como el comercio exterior de Nicaragua han observado un continuo deterioro. Mientras que en 1983 las exportaciones sumaron 429 millones de dólares y las importaciones 807 millones, para 1985 las primeras disminuyeron a 301 millones y las importaciones se incrementaron a 892 millones. En 1986 las exportaciones siguieron declinando, hasta alcanzar un monto de 243 millones de dólares, en tanto que las importaciones se mantuvieron más o menos constantes, arrojando una cifra de 880 millones.²⁴

El déficit comercial se ha cubierto mediante líneas de crédito y pre-

²³ Mientras que en 1980 el café sumó el 36.9 por ciento del total de las exportaciones, para 1986 su participación porcentual se incrementó al 44.8 por ciento. CEPAL, *Notas para el estudio económico de América Latina y el Caribe, 1986, Nicaragua*, México, 8 de septiembre de 1987.

²⁴ *Ibid.*, Cifras preliminares, Cuadro 11.

financiamiento —ventas por adelantado—. El Plan '87 consideraba, sin embargo, disminuir el déficit comercial reduciendo las importaciones en un 14 por ciento —aproximadamente unos 100 millones de dólares— respecto a las compras de 1986 y recuperando el valor de las exportaciones a niveles similares a los de 1985. Para tal efecto se planteaba desarrollar un programa de fomento a las exportaciones no tradicionales, por medio de la creación del FOPEX (Fondo de Promoción de Exportaciones), que impulsaría la liberalización de la comercialización de dichos productos y otorgaría créditos a los productores. Se confiaba, además, en el repunte de los precios internacionales del café, principal producto de exportación nicaragüense desde hace más de un lustro, para cumplir con la meta de incrementar el valor de las exportaciones. Pese a estos cálculos, la caída de los precios del grano a lo largo del año obligó a efectuar un ajuste en los cálculos contemplados en el Plan Económico '87.

Aunque cifras preliminares sobre la balanza comercial de diciembre de 1987 arrojaban un ligero repunte de las exportaciones —260 millones de dólares—²⁵ respecto al monto obtenido en 1986, este valor estaba por debajo del crecimiento de 360 millones de dólares proyectado para ese año. En lo tocante al volumen de las importaciones, si bien se logró que éstas disminuyeran a 743 millones y el déficit comercial se redujo de 637 millones de dólares en 1986 a 483 millones en 1987, este último continuó siendo elevado por lo que presiona negativamente los planes de recuperación económica en el marco de la intensificación de la confrontación militar.

Tanto funcionarios públicos como empresarios nicaragüenses coinciden en señalar a la guerra como el principal factor de la desestabilización económica. Enrique Bolaños, presidente del opositor COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada), afirmaba a mediados del año que la crisis económica obedecía en un 60 por ciento a la guerra, en un 10 por ciento a la crisis internacional y en otro 10 por ciento a la fuerte contracción experimentada por el Mercado Común Centroamericano en los últimos años a consecuencia de la crisis regional, y se preguntaba si el restante 20 por ciento era producto de la descapitalización empresarial o de los errores e ineficiencia del gobierno.

El conflicto bélico ha obligado a desviar importantes recursos humanos y materiales para la guerra. Se estima que desde el inicio de la confrontación en 1981, han sido movilizados unos 510 mil nicaragüenses y que desde 1985 alrededor de un 20 por ciento de la población masculina económicamente activa ha estado integrada anualmente en las

²⁵ Daniel Ortega, *Mensaje de Año Nuevo 1988*, Mimeo., s.l., s.f.

tareas de defensa, con el correspondiente efecto de esta situación en la formación y capacitación de recursos humanos. Así, por ejemplo, la matrícula universitaria, que se había incrementado de 21 mil estudiantes en 1979 a 34 mil en 1983, decreció a 27 mil alumnos en 1987 como consecuencia de la movilización de los jóvenes en los frentes de batalla. Sin la presencia de la guerra y manteniendo los ritmos de crecimiento observados en los años anteriores, se calcula que la matrícula hubiera sumado unos 56 mil estudiantes en 1987. La agresión ha afectado de igual manera los índices de alfabetización alcanzados por la Cruzada Nacional de Alfabetización realizada en 1980. La campaña logró reducir el analfabetismo del 50.3 por ciento registrado en 1979 al 12.95 por ciento. Este porcentaje se incrementó, sin embargo, al 20 por ciento en 1987 a causa de los recortes presupuestales en el gasto social y ante la imposibilidad de mantener el programa de Educación de Adultos con los ritmos e intensidad que mantuvo hasta antes que la guerra se extendiera a amplias zonas del país.

En el terreno de la economía y la producción, el conflicto no sólo ha significado cuantiosas pérdidas sino que ha obligado a suspender, posponer y/o modificar programas sociales y de desarrollo prioritarios para el avance del proceso revolucionario. Henry Ruiz, ministro de Cooperación Externa, indicaba en octubre de 1987 que la agresión y las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos desde 1981²⁶ habían significado pérdidas por 4 mil millones de dólares. De ese monto, 2 mil 800 millones corresponden a daños directos e indirectos y los restantes mil 200 millones se atribuyen al lucro cesante o a las ganancias que se dejaron de percibir durante ese periodo. Tan sólo en 1987, las pérdidas producidas por la guerra sumaron 376.7 millones de dólares.²⁷

La utilización de recursos en rubros no productivos, como la defensa y la seguridad, se han conjugado, además, con la desaceleración de la demanda externa y la caída de los precios de las materias primas a causa de la crisis económica internacional, incidiendo todo ello en el estancamiento de la producción. En este fenómeno interviene igualmente la deficitaria balanza comercial del país y el deterioro de la planta industrial nacional, que requiere de materias primas, repuestos y recursos financieros de difícil acceso en el mercado internacional a causa del

²⁶ Entre las presiones y sanciones económicas y financieras aplicadas por Estados Unidos a Nicaragua desde 1981 cabría destacar el corte de la cuota de banano nicaragüense en 1981 y de la azucarera en un 90 por ciento en 1983; cancelación, en abril de 1981, del remanente de 15 millones de dólares de los 75 millones aprobados en un programa de ayuda en 1979; suspensión de un empréstito de USS 7 millones de la AID en septiembre de 1981; presiones a organismos financieros internacionales para disminuir o suspender créditos y ayuda económica a Nicaragua; embargo comercial en mayo de 1985, etcétera.

²⁷ Daniel Ortega, *op. cit.*

bloqueo estadounidense. De este modo, las tendencias recesivas de la economía han generado un agudo proceso de escasez y de desabastecimiento que ha exacerbado la espiral inflacionaria y se ha constituido en el marco ideal para el desarrollo y expansión de las actividades especulativas y el comercio ilegal, los cuales presionan negativamente sobre la producción en el sector formal. Según señalara la Central Sandinista de Trabajadores, muchos obreros se dedican al comercio al concluir su jornada de trabajo para completar su salario y existe una tendencia creciente a abandonar las labores productivas para optar por este tipo de actividades, que son más remunerativas gracias a la especulación existente. Datos presentados por la central en 1987 indican que de 12 mil 986 trabajadores industriales que comenzaron a laborar en 1986, 7 mil 689 cambiaron de oficio antes de finalizar el año.²⁸

En los últimos años, el proceso inflacionario se convirtió en Nicaragua en el eje alrededor del cual giran importantes elementos de desestabilización económica. En sus raíces se localizan los elementos antes citados —esfuerzo bélico, destrucción de la producción por la guerra, caída de los ingresos por exportaciones, etcétera— así como el efecto que en las finanzas públicas ha significado tanto la política de subsidios a los alimentos básicos y a los servicios de salud, educación y transporte como las tensiones generadas por los grandes proyectos de inversión emprendidos por el gobierno en los primeros años de la revolución, para los cuales, según se constató con el tiempo, no había capacidad administrativa ni financiera. Pese a ello, la agresión sigue siendo el factor determinante en la aceleración de las presiones inflacionarias. Prácticamente desde 1985 la inflación “se disparó” en Nicaragua. Ese año, el índice de precios al consumidor alcanzó un crecimiento del 334.3 por ciento, el cual se duplicaría en 1986 al incrementarse a 747.4 por ciento.²⁹ Al término de 1987, el gobierno informaba que la tasa de inflación sería superior a mil 600 por ciento,³⁰ cifra sin precedentes en la historia económica del país.

La inquietud que generó la espiral inflacionaria a lo largo del año se conjugó con los problemas de abastecimiento del petróleo. La incertidumbre en torno a lograr satisfacer la demanda del energético requerida

²⁸ En 1987 el gobierno se propuso legalizar el comercio clandestino —cerca de 40 mil comerciantes— a fin de regularizar esta situación y recaudar, a través de esta medida, unos 16 mil millones de córdobas —aproximadamente 32 millones de dólares. *Excelsior*, México, 19 de julio de 1987. Datos sobre la población económicamente activa manejados en 1987 indican que ésta estaba integrada por 1 millón 72 mil 800 personas, de las cuales el 48.05 por ciento (515 mil 500) laboraban en el sector formal, 49.9 por ciento (531 mil) en el sector informal y 2.45 por ciento (26 mil 300) estaban desempleadas. *Infopress, Centroamericana*, Guatemala, 26 de marzo de 1987, No. 732.

²⁹ CEPAL, *op. cit.*, Cuadro 1.

³⁰ Daniel Ortega, *op. cit.*

por el aparato productivo y la defensa condujo a que la misma Presidencia de la República hiciera un vehemente llamado el mes de mayo a la comunidad internacional para que ayudara a cubrir el déficit petrolero de 275 mil toneladas de crudo.³¹ Las dificultades para satisfacer la cuota de petróleo —estimada en unas 765 mil toneladas de crudo al año— obligaron al gobierno a decretar en agosto la emergencia energética, que redujo en un 11 por ciento el consumo nacional de estos productos, disminuyó la cuota mensual de gasolina para autos particulares de 19 galones a 17, y aumentó en un 100 por ciento los precios de ésta y el diesel.

El panorama anterior, aunado a la acelerada devaluación de la moneda, cuya cotización en el mercado negro pasó de 3 mil 800 córdobas por dólar en enero de 1987, a 30 mil córdobas por unidad en diciembre de ese año, es un fiel y dramático reflejo del deterioro de una economía asolada por la crisis internacional y por una guerra de desestabilización y desgaste cuyo objetivo está claro: no el colapso militar del proceso revolucionario sino el socavamiento de su legitimidad y de su apoyo popular mediante el agravamiento y la profundización de la crisis económica.

Nicaragua y la precaria paz de Esquipulas II

La firma de los Acuerdos de Paz de Esquipulas II el 7 de agosto de 1987 abrió una nueva coyuntura en la crisis centroamericana, cuyo protagonista central ha sido Nicaragua. Los Acuerdos condujeron a la politización de la crisis regional, destacándose los aspectos del diálogo y la negociación sobre las cuestiones militares, que privaron en los últimos años. El grado de autonomía expresado por los países del área respecto a Washington durante el encuentro de Guatemala y los resultados de la reunión fueron una verdadera sorpresa para el gobierno estadounidense, el que a sólo 48 horas de la cumbre presidencial trató de impedir cualquier con-

³¹ En el marco del Convenio de San José, firmado en 1981 y que establecía la venta de crudo a los cinco países centroamericanos en las siguientes condiciones de pago: 80 por ciento en divisas líquidas o créditos a corto plazo, y 20 por ciento en créditos a largo plazo. México y Venezuela cubrieron en 1981 el abastecimiento de petróleo a Nicaragua; por limitaciones económicas, en 1983 Venezuela sólo cubrió el 25 por ciento y México el 75 por ciento restante; en 1983 sólo México proporcionó crudo y en 1984, luego de aportar el 50 por ciento de la demanda —el otro 50 por ciento lo cubrió la URSS—, México suspendió sus ventas debido al adeudo de 500 millones de dólares que Nicaragua mantenía con este país. En 1986, casi el 50 por ciento de la demanda la cubrió la Unión Soviética y el resto Cuba, la RDA, Checoslovaquia, Hungría y Polonia. En 1987, los países del CAME (Consejo de Ayuda Mutua Económica) cubrieron el 75 por ciento de las necesidades y Nicaragua, que planteó satisfacer su déficit con compras en América Latina, reconoció no poder pagar a México su deuda por enfrentar una situación agobiante a causa de la guerra.

certación entre las naciones centroamericanas y pretendió aislar a Nicaragua presentando una propuesta de paz para la región: el Plan Reagan-Wright.³²

Según trascendió posteriormente, el gobierno sandinista fue consultado sobre el plan de paz de Reagan antes de que éste fuera hecho público.³³ Aunque la respuesta nicaragüense al plan fue positiva, el embajador de Managua en Washington, Carlos Tunnermann, señaló que la Casa Blanca había modificado en el último momento la propuesta en el punto que hacía referencia a un diálogo bilateral entre ambas naciones por cuanto este aspecto abría peligrosamente las puertas para negociaciones futuras, las que, desde la ruptura de los encuentros de Manzanillo, México, han sido sistemáticamente rechazadas por la administración Reagan.

Las presiones de Washington sobre los presidentes centroamericanos no lograron, sin embargo, los objetivos deseados. El Plan Reagan fue rechazado en la cumbre en tanto que Nicaragua, en una inteligente salida, invitaba a Estados Unidos a dialogar “sin condiciones” a fin de desarrollar “un proceso negociador que concluya con la firma de un acuerdo justo y verificable que garantice los intereses” militares y de seguridad de ambos países,³⁴ propuesta que no fue aceptada por la Casa Blanca.

Los resultados de la reunión de Esquipulas II fueron una verdadera sorpresa para la administración Reagan, que confiaba en la fidelidad e incondicionalidad de sus aliados regionales y cuya política hacia el área había sufrido a lo largo del año considerables descalabros tras las revelaciones hechas por el caso Irán-contras, que vinculaba la venta secreta de armas a Irán con el financiamiento a los contrarrevolucionarios nicaragüenses y a éstos, con los millonarios negocios del tráfico de drogas a escala internacional.

En Nicaragua, los dos grandes afectados por la firma de los acuerdos de paz en su momento inicial fueron las fuerzas contrarrevolucionarias y la política de reversión de la revolución sandinista impulsada por Washington desde 1981.

La “contra” no sólo se enfrentó a la nueva coyuntura sin tener un plan contingente para encarar la paz y la lucha política que el momento pacificador dinamizó, sino que su misma causa y existencia empezaron a ser cuestionadas por sectores cada vez más numerosos del sistema y la opinión pública norteamericanos que, afectados por la información publicitada por el escándalo de la venta clandestina de armas a Irán y

³² El plan fue denominado de esa manera pues fue elaborado por el presidente de la Cámara de Representantes, el demócrata James Wright.

³³ Comentarios del embajador de Nicaragua en Washington, Carlos Tunnermann, a los medios de prensa, *El Día*, México, 8 de agosto de 1987.

³⁴ *La Prensa*, México, 6 de agosto de 1988.

sus derivaciones en la crisis regional, veían en la persistencia de la política oficial de apoyo a los antisandinistas no sólo un elemento que violentaba el ordenamiento jurídico existente, sino también —ante los límites de la eficacia militar de los contrarrevolucionarios— el peligro de un involucramiento militar de Estados Unidos en Centroamérica.³⁵

En cuanto a la reversión, si bien Reagan se mantuvo firme en su política hacia Nicaragua, no cabe duda que Esquipulas II dividió a su equipo³⁶ en relación a los pasos a seguir respecto a los antisandinistas —continuar apoyándolos o no, solicitar para ellos ayuda bélica o “humanitaria”, etcétera— y obligó a articular con mayor énfasis el discurso de apoyo a la “contra” con el argumento de que la presión militar desplegada por ésta había sido decisiva para obligar a los sandinistas a sentarse en la mesa de negociaciones y suscribir los acuerdos de paz y que el mantenimiento de tal presión sería la única garantía para que éstos llevaran a cabo sus compromisos. En este argumento se centró el discurso reaganiano hacia Nicaragua en los cinco meses que transcurrieron desde la firma de los acuerdos hasta la cumbre de presidentes centroamericanos que evaluaría en enero, en San José, Costa Rica, la aplicación de dichas medidas por parte de cada país. El mismo Adolfo Calero apuntalaría esta postura en el periodo al declarar que la Resistencia Nicaragüense apoyaba a Esquipulas II “mientras estas propuestas nos permitan luchar y negociar (. . .) Pero si tenemos que luchar o negociar, ese sería el fin de la RN”.³⁷

Aunque el desarrollo de las negociaciones de paz en la región cobraba mayor fuerza y despertaba optimismo entre los pueblos de Centroamérica y en buena parte de los gobiernos latinoamericanos, la política de la Casa Blanca hacia Nicaragua se orientó a reforzar una postura beligerante que exigía al Congreso norteamericano la aprobación de nuevos fondos —270 millones de dólares— en ayuda militar y “humanitaria” a la contrarrevolución por un periodo de 18 meses —“la amenaza de un derrocamiento por la fuerza es lo que se necesita para cambiar el actual régimen totalitario comunista de Nicaragua” afirmó Reagan en plena vigencia de los Acuerdos³⁸ y calificó de maniobras y “cambios cosmé-

³⁵ Según una encuesta del diario *The Washington Post*, el porcentaje de estadounidenses que se oponían a la entrega de nueva ayuda a los antisandinistas a principios de agosto era de un 59 por ciento en contra y un 36 por ciento a favor.

³⁶ Frank Carlucci, ex Consejero de Seguridad Nacional y actual secretario de Defensa, se manifestó más proclive a desarrollar vías de presión alternativas a la guerra para derrocar a los sandinistas, en tanto que Elliott Abrams, subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos, ha mantenido la posición de seguir apoyando abiertamente a los contrarrevolucionarios nicaragüenses.

³⁷ *El Universal*, México, 14 de septiembre de 1987.

³⁸ *El Día*, México, 10. de octubre de 1987.

ticos” las medidas impulsadas por el gobierno sandinista en el marco de la aplicación de los compromisos de Esquipulas II.

En octubre, la Casa Blanca condicionó el cese de la ayuda a la “contra” a que Managua emprendiera una profunda democratización de la vida política, decretara una amnistía amplia e incondicional a todos los “presos políticos”, implantara un cese al fuego, adelantara elecciones antes de 1990 y entrara en negociaciones directas con la “contra”.

Es en este contexto que el gobierno nicaragüense acogió el Plan de Paz con optimismo pero con reservas, conciente de las limitaciones que el Acuerdo encerraba en tanto Estados Unidos mantuviera su agresiva política hacia la revolución sandinista. El presidente Daniel Ortega afirmaría al respecto: “Si bien es cierto que soplan aires de esperanza, vivimos todavía una guerra terrible y no nos vamos a engañar, pues aunque apoyamos y somos consecuentes con los acuerdos de Guatemala, la agresión sigue siendo impulsada por el gobierno de Reagan”,³⁹ y alertaría sobre la posición de republicanos y demócratas en el Congreso con relación a Nicaragua: “En el congreso estadounidense no se deciden si ayudan o no a los contras, sino que conspira abiertamente y a plena luz del día en la mejor manera de destruir el proceso nicaragüense, por la vía militar que propone el mandatario Ronald Reagan o por medio de las concesiones que es la línea de los demócratas”.⁴⁰

Si bien al calor de Esquipulas II el debate en el Congreso de Estados Unidos en torno a la aprobación de nuevos fondos para la “contra” se postergó de septiembre de 1987 al 3 de febrero de 1988, estas fuerzas continuaron recibiendo pertrechos militares como parte del remanente de la ayuda de los 100 millones de dólares y se beneficiaron con 3.5 millones de ayuda “humanitaria” sancionados por el Congreso en septiembre y por millones otorgados por el Senado en diciembre. Asimismo, este último acordó, en octubre, brindar 250 mil dólares a las “instituciones democráticas” en Nicaragua —diario *La Prensa*, partidos opositores y otros medios de comunicación— a fin de asegurar su supervivencia en tanto se pusiera en práctica el Acuerdo de Paz.

Lejos de amainar durante los meses de aplicación de los Acuerdos, la agresión contrarrevolucionaria se recrudeció, sobre todo a partir de noviembre, con el objetivo de presionar al gobierno nicaragüense a emprender negociaciones directas con la dirigencia de la RN y demostrar al Congreso la eficacia del accionar militar “contra” para respaldar la petición de renovar la ayuda a fin de mantener la presión militar y el desgaste económico sobre el régimen revolucionario.

³⁹ *El Sol de México*, 28 de septiembre de 1987.

⁴⁰ *Unomásuno*, México, 27 de septiembre de 1987.

La guerra ha tenido para el pueblo de Nicaragua un altísimo costo humano. Para julio de 1986 se estimaba que las víctimas* provocadas por el conflicto bélico entre 1981 y 1986 sumaban unas 34 mil 290 personas, de las cuales 16 mil 925 eran nicaragüenses involucrados con la contrarrevolución⁴¹ y el resto población civil, efectivos del EPS, reservistas y milicianos. A mediados de 1987 esta cifra se había incrementado a 43 mil 176 personas, el 55 por ciento de las cuales —22 mil 495— correspondía a víctimas mortales, incluyendo entre ellas a 2 mil 327 mujeres y 2 mil 210 niños. Según estos datos, el 1.35 por ciento de la población de Nicaragua —cuya población total es de 3 millones 200 mil habitantes— ha sido víctima de la guerra y un 0.7 por ciento ha muerto a consecuencia de ella. Datos de enero de 1988 registraban que el número de víctimas se había incrementado a 50 mil 382 personas al término de 1987.⁴²

Información oficial y de organismos humanitarios regionales daba cuenta, además, de aproximadamente 10 mil huérfanos a causa de la guerra y de 19 mil heridos y lisiados.

Lo anterior, aunado a la sangría económica provocada por la agresión, explica claramente por qué la búsqueda y la concreción de la paz se han convertido en Nicaragua en una esperanza y reclamo nacionales. El 22 de septiembre, el vicepresidente Sergio Ramírez reconocía la obligación del gobierno de dar los pasos necesarios para alcanzar la paz y trasladar la lucha del terreno militar al ámbito de la política, “porque en los campos de batalla hemos tenido que sacrificar a miles de jóvenes en una guerra injusta, que nos han impuesto”.

Al invitar el once de agosto a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y a los partidos políticos legalmente inscritos a formar parte de la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR), Nicaragua se convirtió en el primer país centroamericano en impulsar la aplicación de los Acuerdos de Paz. La CNR, con una plural composición, quedó finalmente integrada por los siguientes miembros en calidad de propietarios: el cardenal Miguel Obando y Bravo —designado a su vez por el gobierno como presidente de la CNR— como delegado de la Conferencia Episcopal; el vicepresidente de la República, Sergio Ramírez Mercado, como representante del gobierno; Mauricio Díaz, del Partido Popular Socialcristiano, por los partidos políticos; y Gustavo Parajón, presidente del Comité Evangélico Pro Ayuda al Desarrollo, en calidad de personalidad

* El concepto incluye secuestrados, heridos y víctimas mortales.

⁴¹ *Barricada*, Managua, 20 de julio de 1986.

⁴² En su mensaje de año nuevo en 1988, el presidente Daniel Ortega mencionaba que la “contra” había sufrido en 1987 6 mil 332 bajas —4 mil 813 muertos, 502 capturados y el resto heridos. Las bajas civiles y gubernamentales sumaron 6 mil 874 víctimas —2 mil 491 muertos, 3 mil 601 heridos y 782 secuestrados.

distinguida e independiente. Como representantes suplentes fueron elegidos el obispo Bosco Vivas, suplente auxiliar de Managua; René Núñez, secretario de la presidencia; Erick Ramírez, del Partido Socialcristiano; y Gonzalo Ramírez, presidente de la Cruz Roja Nicaragüense.

Otras medidas adoptadas por el régimen para allanar el camino de la aplicación de los compromisos establecidos por el Plan de Paz a partir del 7 de noviembre (amnistía, alto al fuego, cese de la ayuda a fuerzas irregulares y no uso de los territorios para agredir a otros Estados) y favorecer la apertura política y la reconciliación nacional fueron las siguientes:

- El 25 de agosto el gobierno anunció que el obispo Pablo Antonio Vega y el sacerdote Bismarck Carballo podían reingresar a Nicaragua, luego de haber sido expulsados del país en julio de 1986. Carballo retornó el 12 de septiembre en tanto que Vega decidió no hacerlo argumentando: “Tengo más contacto con los nicaragüenses estando fuera que si estuviera adentro”.
- Convocatoria de la Presidencia de la República el 13 de septiembre a todos los partidos políticos legalmente constituidos para participar en un Diálogo Nacional que sería instalado el 5 de octubre. En dicho proceso, al cual se incorporarían en su quinta sesión (3 de noviembre) las agrupaciones políticas sin reconocimiento legal, participaron la totalidad (11) de los partidos del país⁴³ y cinco agrupaciones. En la décima sesión se llegó a un primer acuerdo del Diálogo, por medio del cual se aceptaba por consenso una agenda de discusión presentada por el gobierno sobre diversos temas relativos al proceso de democratización del país: *a)* Propuestas de reformas constitucionales de los partidos políticos y agrupaciones políticas; *b)* Ley de Municipalidades; *c)* Ley Electoral; *d)* Ley de Partidos Políticos; *e)* Parlamento Centroamericano y sistema electoral para elegir a los 20 representantes por Nicaragua; *f)* Fecha de elecciones municipales y del Parlamento Centroamericano; *g)* Mecanismos de participación de los partidos políticos extraparlamentarios en la institucionalidad del país; y *h)* Elaboración y promulgación de las leyes para la aplicación de la Constitución. Respecto a las cuestiones referidas a la guerra y la paz y la crisis económica, en las cuales no hubo con-

⁴³ Partido Conservador Demócrata de Nicaragua; Partido Liberal Independiente (PLI); Partido Popular Social Cristiano (PPSC); Partido Socialista Nicaragüense (PSN); Partido Comunista de Nicaragua; Movimiento de Acción Popular-Marxista Leninista (MAP-ML); Partido Unionista Centroamericano (PUCA); Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) –se retiró del Diálogo Nacional en la primera sesión del mismo por estar en desacuerdo con la suscripción de los Acuerdos de Paz de Esquipulas II–; Partido Social Cristiano (PSC); Partido Social Demócrata (PSD) y Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

senso, se nombraron dos comisiones técnicas que elaborarían propuestas de puntos a tratar en estos temas. El 15 de diciembre, luego de trece sesiones, el Diálogo Nacional fue suspendido temporalmente ante el retiro de 14 partidos políticos y agrupaciones de oposición que habían planteado una propuesta de reformas constitucionales al gobierno, el cual respondió que no era el Ejecutivo sino la Asamblea Nacional, Poder Legislativo de la República, la instancia facultada para decidir sobre tales asuntos.⁴⁴

- Tras un año y tres meses de clausura, el diario opositor *La Prensa* fue autorizado el 20 de septiembre a volver a circular, “sin más restricciones que las que impone el trabajo periodístico en el ejercicio responsable del diarismo”. *La Prensa* reaparecería el primero de octubre.⁴⁵
- El 22 de septiembre el gobierno dispuso la apertura de Radio Católica, emisora de la Curia Arzobispal cerrada en enero de 1986, y decretó la suspensión de la censura previa en todos los medios de comunicación.
- El mismo día 22, por decreto presidencial, el gobierno informó que se iniciarían a partir de esa fecha las acciones necesarias para establecer gradualmente un cese del fuego en todo el país.
- El 24 de septiembre se autorizó oficialmente la creación de comisiones regionales o departamentales de reconciliación, las cuales estarían subordinadas a la Comisión Nacional de Reconciliación. La comunicación gubernamental recomendó que dichas estructuras regionales estuvieran presididas por el obispo de la diócesis y las integraran el delegado de la Presidencia, representantes de la Cruz Roja, miembros de partidos políticos y personalidades notables, entre ellas dirigentes de iglesias evangélicas.
- A finales de septiembre, el gobierno decretó un cese del fuego unilateral en una extensión territorial de mil 400 km² que cubre gran parte de los departamentos de Nueva Segovia, Jinotega y una porción de Zelaya Sur. La medida entraría en vigor del 7 de octubre al 7 de noviembre, con posibilidades de ampliar la fecha. Según el decreto, tropas del Ejército Popular Sandinista se con-

⁴⁴ *Exposición del comandante Carlos Núñez, representante del presidente de la República, a la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento (CIVS), 5 de enero de 1988. mimeo., s.l., s.f.*

⁴⁵ Luego de negar reiteradamente durante años que *La Prensa* recibiera financiamiento del gobierno de Estados Unidos, Jaime Chamorro, director del diario opositor, reconoció a principios de octubre de 1987 que el rotativo había recibido en los dos últimos años fiscales financiamiento “esencial” de la Casa Blanca para comprar equipo por la cantidad de 254 mil dólares, monto distribuido a través de la Fundación Nacional para la Democracia. Sin esas donaciones, el periódico, en seria crisis financiera, no hubiera podido publicarse, afirmó Chamorro.

centrarían en diferentes puntos de las tres zonas. Ni la población civil ni las milicias serían desalojadas y las últimas conservarían sus armas para proteger bienes, familias y producción.

Al entrar en vigencia el Acuerdo de Paz el 5 de noviembre, el presidente Daniel Ortega anunció la firma de dos decretos: uno de amnistía para todos los detenidos desde enero de 1981 por participar en actividades contrarrevolucionarias y otro para levantar el estado de emergencia vigente desde septiembre de 1982. Ambos decretos, ratificados por la Asamblea Nacional, entrarían en vigencia a partir del momento en que la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento verificara *in situ* el cese de toda ayuda regional o extrarregional a los grupos antisandinistas, así como el compromiso adquirido por los gobiernos centroamericanos de no apoyar y de no permitir el uso de sus territorios a estas fuerzas para atacar y desestabilizar al régimen nicaragüense. El primer mandatario informó también en esa ocasión sobre la firma del tratado de constitución del Parlamento Centroamericano, mismo que sería enviado a la Asamblea Nacional para su ratificación, e indicó que el gobierno recurriría a la mediación del cardenal Miguel Obando y Bravo para negociar con los antisandinistas la concertación de un cese al fuego. Al respecto, el gobierno fue enfático en aclarar que la mediación de Obando descartaba cualquier diálogo político con la contrarrevolución y que sólo comprendía la concertación del alto al fuego.

Nicaragua ha sido, sin duda, el país centroamericano que más pasos ha dado en la aplicación de los Acuerdos de Paz de Esquipulas II. Las medidas políticas adoptadas tras la reunión cumbre de mandatarios en Guatemala han abierto espacios políticos cerrados y/o restringidos a causa de la agresión externa y la agudización de la lucha política interna, y han revitalizado el debate local favoreciendo el diálogo entre las fuerzas opositoras organizadas en partidos políticos y el gobierno. Todo ello indica que el gobierno sandinista no sólo aceptó el reto de ampliar y profundizar el pluralismo político en el seno del proceso popular revolucionario sino que, con su disposición por alcanzar la pacificación nacional por encima de cualquier otra consideración, flexibilizó su actitud frente a la negociación con la contrarrevolución y acordó establecer negociaciones directas con estas fuerzas en aras de concertar un alto al fuego en el país.

Si bien la confrontación política e ideológica ha sido la pauta de la vida nicaragüense en los meses posteriores a la firma de los Acuerdos de Esquipulas II, la guerra auspiciada por la Casa Blanca a través de la agresión contrarrevolucionaria, continúa siendo el factor que determina la evolución de los acontecimientos políticos tanto en Nicaragua como a

nivel regional. Aunque la estrategia de la reversión del proceso revolucionario impulsada por la administración Reagan fue severamente afectada por los compromisos de Esquipulas y las revelaciones del asunto Irán-contras, al grado que en febrero de 1988 el Congreso de Estados Unidos rechazó la solicitud de ayuda a los contrarrevolucionarios hecha por la Casa Blanca, el gobierno norteamericano no ha renunciado a sus propósitos de derrocar al régimen sandinista. Los pasos dados por Managua en la consecución de la paz y la reconciliación interna han sido insuficientes para Washington: de “relajamiento temporal de los controles” los calificó el presidente Reagan a finales de septiembre de 1987, insistiendo que sólo la presión militar obligaría a los sandinistas a cumplir con los Acuerdos.

Las dificultades en la concreción de la pacificación y la apertura política en Nicaragua son múltiples: desde las limitaciones que impone una economía deteriorada por la guerra hasta la persistencia de la agresión militar de la “contra”, con sus altísimos costos humanos y materiales, pasando por las dificultades y escollos entre los países signatarios de los Acuerdos para definir el concepto de simultaneidad en la aplicación de las medidas del diálogo, amnistía y cese del fuego contempladas en el Plan.

Hasta ahora, la guerra ha actuado como un factor que ha potenciado el consenso respecto al proceso revolucionario y contribuido a legitimar la política desplegada por el gobierno sandinista frente a la agresión externa. El reto actual es que ese consenso se profundice y enriquezca en un panorama donde el juego político y el debate con la oposición interna tiende a incrementarse a institucionalizarse y cuando existe el claro propósito por parte de ciertos sectores estadounidenses –tanto del Congreso como del gobierno– de promover a la “contra” como una opción política –una especie de “nueva derecha”– frente a los sandinistas y con el generoso respaldo económico, político e ideológico de Washington.

La revolución sandinista ha sido capaz de mostrar, durante todos estos años, una creatividad y flexibilidad singulares consecuentes con el carácter popular del proceso. Hoy, los retos están sobre la mesa.